



Presupuesto basado en Resultados

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Créditos

Rogelio Ramírez de la O • Secretario de Hacienda y Crédito Público

Juan Pablo De Botton Falcón • Subsecretario de Egresos

Jaime Adrián Zambrano Mátar • Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Coordinación del Diplomado:

Lorena Caballero López

Responsables de contenidos:

Carlos Cruz González

Elio César Flores Carrera

Ana Patricia Cruz Espinosa

Diseño gráfico y audiovisual:

Alicia Isabel Gómez Reyes

Claudia Liliana Domínguez González

Staff de apoyo:

Julio César Alemán Sánchez

Introducción al Diplomado

El **Presupuesto basado en Resultados** y el **Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED)** ha permitido consolidar la utilización de una estructura programática con base en **Programas presupuestarios (Pp)** para orientar la asignación de recursos al cumplimiento de objetivos específicos y claros para resolver problemas públicos, atender necesidades o aprovechar oportunidades. A 15 años de su adopción, el **PbR-SED** en México constituye un elemento fundamental de medición de desempeño del quehacer público ya que, por medio de éste, los **Pp** cuentan con indicadores y parámetros que miden el avance en las metas u objetivos que buscan alcanzar para dar cumplimiento a la **Planeación Nacional**. Asimismo, es una fuente de información y datos que permite hacer comparaciones entre lo observado y lo esperado.

El **PbR-SED** es una herramienta indispensable para conocer si los **Pp** están atendiendo adecuadamente a las poblaciones para las cuales fueron creados, pero, sobre todo, para conocer los cambios particulares que las personas están experimentando producto de la intervención gubernamental.

El **Diplomado Presupuesto basado en Resultados** está claramente orientado en la implementación de la **Metodología del Marco Lógico (MML)** y en la construcción de **Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD)**. Sin embargo, el estudio de la misma está acompañado de una serie de elementos teóricos y conceptuales que le dan sustento a la metodología y que ayuda a las y los participantes a que comprendan el marco sobre el cual se implementa la misma.

Para lograrlo, el Diplomado está conformado por 11 Lecciones distribuidas en 3 Módulos, que a continuación se presentan:

Módulo 1. Finanzas Públicas y Planeación Nacional

Lección 1. Marco teórico para la intervención del Estado en la economía

Lección 2. Conceptos fundamentales de finanzas públicas

Lección 3. El proceso de planeación



PbR Presupuesto basado en Resultados

Lección 4. Sistema Nacional de Planeación Democrática

Lección 5. Planeación a largo plazo con un enfoque holístico

Módulo 2. Gestión para Resultados y Presupuesto basado en Resultados

Lección 6. La GpR y el PbR

Lección 7. Implementación de la Metodología de Marco Lógico.

Lección 8. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

Módulo 3. Herramientas para la Consolidación del PbR-SED en México

Lección 9. Indicadores de desempeño como herramienta de seguimiento

Lección 10. La mejora de Programas presupuestarios a través de enfoques transversales.

Lección 11. Avances y retos del PbR-SED en México

Considerando que la duración total del Diplomado es de 12 semanas, se recomienda ampliamente que se aborde una Lección por semana y se reserve la última para dar respuesta a la evaluación final. Sin embargo, al ser un diplomado a ritmo propio, el avance de los contenidos queda a criterio de cada participante.



Módulo 1.

Finanzas Públicas y HACIENDA Planeación Nacional



Índice

| | |
|--|----|
| Presentación | 7 |
| Lección 1. Marco teórico para la intervención del Estado en la economía | 10 |
| 1.1. Enfoques sobre el papel del Estado en la economía | 11 |
| 1.2. Bienes públicos..... | 21 |
| 1.3. Marco constitucional para la actuación del Estado mexicano | 25 |
| 1.4. Política macroeconómica..... | 30 |
| 1.5. Políticas pro-cíclicas y anti-cíclicas..... | 40 |
| Referencias | 43 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Presentación

Después de muchos años de evolución de la teoría económica con base en la observación de los distintos modelos económicos implementados en el mundo, queda claro que la intervención del Estado en la economía no solo es necesaria, sino deseable. Actualmente, no existe un solo Estado en donde el mercado regule completamente la provisión de los bienes y servicios requeridos por la sociedad, lo que sí existe, es un distinto nivel de intervención dependiendo del modelo adoptado por el Estado.

En el caso de México, fue en las últimas décadas del siglo XX, concretamente a partir de 1980, que se adoptó un enfoque económico neoliberal, lo que significó que el Estado limitará su participación e intervención en la regulación de los mercados y en poca medida se enfocaba en la atención de las necesidades de la ciudadanía. En este contexto, el papel de las instituciones públicas como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, se vio significativamente disminuido, bajo la premisa de que el buen funcionamiento de los mercados basta para corregir distorsiones, desequilibrios e injusticias. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrar que dicha premisa no necesariamente se sostiene.

El equilibrio que genera la intervención del Estado es fundamental para poder aspirar a una economía productiva, pero que se encuentre bajo un marco normativo y regulatorio adecuado, donde el Estado vigile y sea impulsor del desarrollo, la justicia y el bienestar, ya que no podemos confiar en que los mercados son capaces de resolver y corregir las distorsiones, desequilibrios y otros problemas. Es importante que el Estado cuente con la fortaleza suficiente para que lo concibamos como órgano garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho. De igual forma, el Estado debe ser generador e impulsor de políticas públicas coherentes y articulador de los propósitos nacionales. Para ello es indispensable que se conozcan las herramientas con las cuales dispone el Estado para intervenir en la economía y cómo éstas se pueden aplicar a las aspiraciones de nación del Gobierno de México.



En este Módulo 1 se hace una revisión de los distintos postulados sobre la **intervención del Estado en la economía** para poder entender por qué ésta es necesaria y poder determinar la forma como se debe llevar a cabo esta intervención. Adicionalmente, revisaremos el marco constitucional que le da sustento a la intervención del Estado mexicano considerando que éste es el instrumento normativo de mayor jerarquía y del cual se desprende el entramado normativo que organiza el funcionamiento de la **Administración Pública Federal**.

Asimismo, se indaga en los distintos instrumentos de intervención del Estado en la economía, entre los cuales destacan la **política fiscal** y la **política monetaria**. También se identifica la forma como se determinan los ingresos de la nación y la forma como estos ingresos se distribuyen en favor de la población. Finalmente, se hace una revisión de la forma como se clasifica el **gasto público** de acuerdo con tres criterios, dando como resultado las clasificaciones: **administrativa, funcional-programática y económica**.

Un factor fundamental para el correcto ejercicio del gasto público, que a su vez conlleva a una intervención eficiente y eficaz del Estado en la Economía, es la **planeación**. La planeación es un ejercicio que se debe realizar al inicio de toda intervención pública, pero debe continuar a lo largo de su implementación en el camino a resolver un problema o atender una necesidad concreta de la sociedad.

Para ello, revisaremos el proceso de planeación desde un enfoque teórico conceptual para entender por qué la planeación estratégica se lleva a cabo a través de distintos niveles, todos vinculados con el fin de conseguir los objetivos superiores de las organizaciones gubernamentales. Esto se aterriza en el **Sistema Nacional de Planeación Democrática en México** que se implementa mediante el **Plan Nacional de Desarrollo (PND)**.

Al ser el PND el instrumento de planeación superior en nuestro país, es necesario que existan herramientas que especifiquen la forma como los grandes objetivos plasmados en el Plan se van a implementar. Estas herramientas son precisamente los **Programas derivados del PND**.

La planeación nacional a largo plazo busca que los proyectos de nación no solo se queden durante un sexenio, sino que trasciendan a futuro. Internacionalmente, una de las



PbR Presupuesto basado en Resultados

principales herramientas para que los esfuerzos trasciendan los periodos presidenciales son los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, ya que por medio de estos se busca que la planeación nacional se haga con un enfoque holístico con miras al año 2030.

Incorporar los ODS en la **Planeación Nacional** puede resultar en una oportunidad para que México cumpla con sus compromisos hacia la población. Así, concluiremos con el estudio del **Presupuesto basado en Resultados (PbR)** como una herramienta para generar el bienestar que se debe otorgar a los integrantes de la sociedad mexicana.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Lección 1. Marco teórico para la intervención del Estado en la economía

Desde los orígenes del Estado moderno existe una importante discusión para determinar qué tanto éste debe intervenir en el mercado y, de ser así, en qué medida y con qué herramientas debe hacerlo. El equilibrio de la intervención estatal es fundamental para poder aspirar a una economía que sea productiva pero que se encuentre bajo un marco normativo y regulatorio donde el Estado vigile y sea impulsor del desarrollo, la justicia y el bienestar, ya que no podemos confiar en que los mercados puedan ser capaces de resolver y corregir las distorsiones y desequilibrios que se generan en la sociedad y en la economía. Es importante que el Estado cuente con la fortaleza suficiente para que lo concibamos como órgano garante de derechos humanos, la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho.

Primeramente, para comprender **el papel del Estado en la economía** existen diferentes enfoques que tienen sus propias ventajas y desventajas. Al respecto, cabe destacar que la no intervención y la total intervención son extremos a los cuales en la realidad nunca se llega. Los Estados que funcionan actualmente o que han funcionado históricamente fluctúan en una escala de grises entre estos dos extremos.

En un segundo momento, abordaremos los **bienes públicos** y aquellos que no son generados por el mercado de forma eficiente, de tal forma que es indispensable la intervención del Estado. Vale la pena mencionar que muchos de estos bienes públicos implican o involucran el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, por lo cual es indispensable que su provisión se haga de forma eficiente.

Asimismo, revisaremos el **marco constitucional para la actuación del Estado mexicano**, no solo en la economía sino de forma general. Esta revisión se hace considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el instrumento normativo de mayor jerarquía y del cual se desprende el entramado normativo que organiza el



funcionamiento de la Administración Pública Federal, y bajo el cual también se norman temas de relevancia en materia presupuestaria y de Planeación Nacional.

Finalmente, haremos una revisión teórica de la **política macroeconómica**, entendiéndola como el grupo de herramientas por medio de las cuales se interviene en la producción, el empleo, el consumo y la inversión, es decir, las herramientas por medio de las cuales se establece la política económica de un país. Abordaremos dos tipos de políticas macroeconómicas conocidas como pro-cíclicas y anti-cíclicas por medio de las cuales se puede estimular o contraer la economía dependiendo del enfoque que siga cada gobierno.

1.1. Enfoques sobre el papel del Estado en la economía

El **Estado**, entendido desde un punto de vista contemporáneo, es la forma como una sociedad asentada en un territorio definido se organiza y, a través de un gobierno y un orden jurídico, ejerce su soberanía. Desde sus orígenes, siempre ha existido una relación entre el Estado y la economía. De manera simplificada se entenderá a la economía como “la ciencia que estudia la forma en que las sociedades, con sus recursos escasos y limitados, deciden qué se produce, cómo y para quién” (Astudillo 2012:14).

Históricamente, la relación entre Estado y economía fluctúa entre la intervención y la no intervención. En el primero, conocido como **enfoque Keynesiano** en honor a John Maynard Keynes, **el Estado toma decisiones coyunturales para definir qué se produce, cómo y para quién, es decir, interviene directamente en el mercado**. Por otro lado, se encuentra el **enfoque clásico**, el cual considera que **el mercado tiene la capacidad de regularse a sí mismo sin necesidad de que el Estado intervenga**.



Figura 1.1. Enfoques teóricos de la relación entre el Estado y la economía



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Samuelson y Nordhaus (2005).

Para las escuelas de pensamiento de **enfoque liberal** propuesto por Adam Smith y David Ricardo, los **agentes económicos**, al buscar su máximo bienestar individual como consumidores o los mayores beneficios en la utilización de sus activos como oferentes o productores, **no sólo están llevando a cabo la asignación más eficiente de los recursos sino también generan bienestar social**. Así, toda intervención externa al libre mercado, como los impuestos o la fijación oficial de precios, puede llegar a distorsionar la eficiencia económica, la cual sólo se logra a través de la **libre competencia**, es decir, por medio de una **economía plenamente orientada por el mercado**.

Desde este **enfoque liberal**, las desigualdades sociales no son un tema de la economía y su atención por parte del Estado no debe realizarse atentando contra el libre mercado.



Figura 1.2. Enfoque liberal



▮ Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.

A diferencia de los enfoques liberales que postulan un Estado mínimo y la reducción al máximo de su intervención en la economía, existen otros enfoques que plantean, desde la experiencia histórica, que el Estado interviene directamente en los procesos de producción, distribución, circulación y consumo a través de empresas de su propiedad – muchas de ellas monopolios–, así como a través de controles rigurosos en los procesos de distribución y circulación de bienes y servicios, es decir, una completa estatización de la economía.



En un punto intermedio entre estas dos posturas se encuentra el **enfoque de la Economía del Bienestar** planteada por Arthur Pigou, en el cual se reconoce que, ante la incapacidad de la economía orientada solo por el mercado de mantener el pleno empleo y de atender necesidades sociales, **se requieren programas gubernamentales que atiendan temas como la seguridad social, la vivienda y los seguros contra el desempleo**. Esta visión del Estado se complementa con la reivindicación de las políticas monetarias para evitar el crecimiento de los precios (inflación) y la inestabilidad del tipo de cambio, junto con las políticas impositivas y de gasto para mantener un nivel de demanda global que promueva las inversiones y el empleo en tiempos de recesión de la economía.

Pigou y la Escuela del Bienestar destacaron que “los mercados presentaban fallos o disfuncionalidades contrariamente a lo que suponen las argumentaciones naturalistas del liberalismo económico” (Jeannot, 2000: 5). Por esta razón, proponen que la intervención del Estado sólo debe concentrarse en **corregir las fallas de mercado y fortalecer los arreglos institucionales** que afectan el funcionamiento del mismo. Las **fallas de mercado** representan imperfecciones de un sistema de precios que impiden la asignación eficiente de los recursos y por ende generan desigualdades sociales.

En este sentido, un aspecto fundamental de la intervención del Estado en la economía lo constituye el conjunto de incentivos (o desincentivos) que puede crear a través de la legislación para normar y regular las actividades de los particulares, en especial de las empresas privadas. La regulación puede servir para corregir fallas de mercado, evitar la constitución de empresas dominantes en un mercado, prohibir y sancionar prácticas económicas que constituyen conductas delictivas. Ejemplo de estas fallas es el posible acaparamiento o concentración en la provisión de cierto bien o servicio, lo que en consecuencia termina en un aumento considerable de sus precios, contrario a lo que pasaría si hubiese una mayor cantidad de proveedores. A esta falla se le denomina **ausencia de competencia** y se materializa a través de la conformación de **monopolios**, concepto que también tiene sus respectivas variantes como los duopolios u oligopolios.



Estos son algunos ejemplos de las fallas del mercado que justifican el involucramiento del Estado, a fin de proporcionar mayor certidumbre a los agentes económicos en relación con los intercambios de bienes y servicios.

Figura 1.3. Fallas de mercado



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Stiglitz (2000).

Cuando el Estado interviene en la economía se generan una serie de reglas formales que estructuran la interacción social, los incentivos y las restricciones que dan forma a la interacción humana. A estas reglas se les conoce como institucionales (North, 1990 citado por Prats, 2007). Los **arreglos institucionales** a su vez son instrumentos de intervención del Estado en la economía, los cuales buscan el adecuado funcionamiento de los mercados. Entre ellos destacan los derechos de propiedad, la gobernanza, la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas. En la siguiente figura se resume en qué consiste cada uno de estos.



Figura 1.4. Arreglos institucionales



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Aguilar (2006).

Podría pensarse que el hecho de que el Estado participe en la economía es razón suficiente para generar un ambiente de estabilidad. Sin embargo, esto no siempre sucede así, debido a que, en ocasiones, dicha participación puede generar consecuencias negativas. A continuación, se representan estas Fallas del Estado o Fallos de Gobierno.



Figura 1.5. Fallas del Estado o de Gobierno



| Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Stiglitz (2000: 17-18).

Instrumentos de intervención del Estado

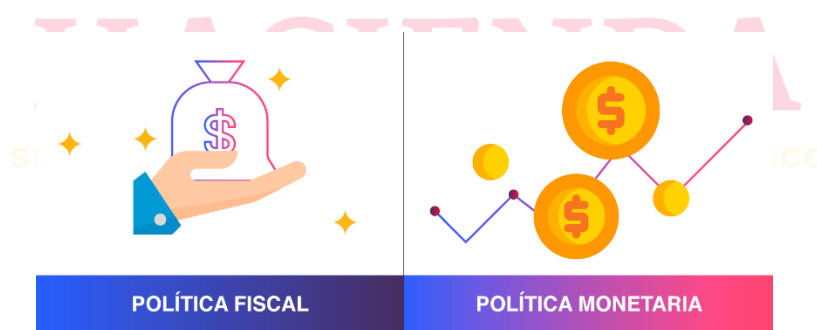
Más allá de los enfoques teóricos, la existencia de un Estado que se encuentre en alguno de estos dos extremos es prácticamente imposible. Lo que en la realidad sucede es que los Estados optan por intervenir más o menos de acuerdo con la corriente de pensamiento económico que adopten. Estas pueden ir desde la participación estatal directa en la producción de bienes y servicios, hasta la intervención indirecta a través de



esquemas de regulación. En otras palabras, todos los Estados intervienen en cierto gradiente, pero también, permiten que más o menos ámbitos del mercado se autorregulen.

Sin importar el nivel de intervención que cada Estado tiene, todos inciden en el comportamiento macroeconómico por medio de dos instrumentos conocidos como: **política fiscal** y **política monetaria**. Mientras que la política fiscal regula el **ingreso y gasto del Estado**, la política monetaria regula la **disponibilidad y costo del dinero** en la economía. Ambas políticas son indispensables para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo social, ya que gracias a ellas se establece la organización y prioridades de las finanzas públicas.

Figura 1.6. Instrumentos de Intervención



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Banxico educa (2019).

Concretamente en temas de desarrollo social, la intervención del Estado es indispensable ya que el mercado **no garantiza condiciones de equidad** en la distribución de la riqueza ni en el reparto de los beneficios económicos que erradiquen la pobreza. Por esta razón, las políticas gubernamentales de intervención son fundamentales para evitar el hambre y combatir la pobreza, sin dejar a un lado el crecimiento económico a través del incremento de la productividad de los factores de producción y de la regulación de la competitividad.

A la luz de la crisis global de 2008, se replanteó el papel del Estado y del diseño de las políticas económicas, ya que la falta de una adecuada regulación de los mercados generó escenarios con estructuras monopólicas y burbujas especulativas que llevaron a una crisis financiera que terminó debilitando el crecimiento y la estabilidad de las economías. En



los propios términos del mercado, el resultado fue la ineficiencia y el desempleo de los recursos productivos, en especial del trabajo.

La intervención pública, a través de políticas macroeconómicas, sectoriales, fiscales y monetarias, así como la regulación de los mercados se consideraron como instrumentos necesarios para promover la eficiencia y la equidad frente a las fallas de mercado, pero terminaron sumiendo en la pobreza a más población al verse redoblados estos esfuerzos neoliberales. Desde esta perspectiva, las políticas económicas deben propiciar las condiciones para el desarrollo económico, mediante la promoción de las inversiones y el impulso a la productividad, pero también para orientar la inversión pública y privada con una visión de desarrollo nacional, crecimiento equilibrado entre las regiones y socialmente **equitativo e incluyente**.

Una visión integrada del desarrollo económico y social requiere del adecuado **balance** entre el funcionamiento del mercado y la intervención del Estado para impedir que se concentre la riqueza en unas cuantas manos, mientras que se oprimen a sectores poblacionales y grupos vulnerables históricamente rezagados. A su vez, el Estado debe intervenir para promover y atender los derechos sociales universales y la equidad. De este modo, la participación del Estado en la economía se justifica por su responsabilidad de intervenir en la **orientación del desarrollo**.

El Estado tiene una función sustantiva en la promoción del crecimiento económico y del desarrollo social. Adicionalmente, cabe destacar que su intervención debe ser eficaz, es decir, que la acción gubernamental no se debe limitar a contener fallas de mercado o situaciones de inequidad, sino que se debe garantizar que las políticas públicas cumplan realmente los objetivos para las que son diseñadas y que la población reciba en forma equitativa los beneficios de la acción del Estado. Así, hoy en día se reformula la visión del papel del Estado, con acento especial en la relevancia de su eficacia en hacer valer los derechos sociales, promover el desarrollo del país y buscar el bienestar para toda la población.



Figura 1.7. Principales objetivos de la acción del Estado



| Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.

A manera de conclusión, el debate sobre la intervención se resume en la necesidad de definir **hasta dónde debe llegar la intervención del Estado en la economía** de un país. El Gobierno de México busca que las instituciones públicas consoliden su papel como **rectoras e impulsoras del desarrollo**, la justicia y el bienestar con el fin de corregir distorsiones, desequilibrios e injusticias que contribuyan al desarrollo y bienestar de la población del país.



1.2. Bienes públicos

Una intervención característica del estado contemporáneo es la provisión de **bienes y servicios públicos** a la sociedad para atender sus necesidades y demandas. Este tipo de bienes y servicios son distintos de los privados, los cuales son objeto de transacción económica (compra-venta), y su función en el mercado es satisfacer necesidades y gustos de los consumidores. Desde la perspectiva de los productores de dichos bienes y servicios, éstos deben generar un ingreso o renta por su **usufructo** o **enajenación**.

Usufructo. Es el derecho a disfrutar bienes ajenos, en este caso los públicos, con la obligación de conservarlos.

Enajenación. Es la venta, donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad.

Los bienes públicos se caracterizan por ser accesibles para cualquier persona sin restricción, por lo que es el Estado el encargado de proveerlos. Los bienes públicos tienen tres características fundamentales: son **consumidos de forma colectiva**, **no se puede excluir a un individuo o sector** de la población para su consumo y **no existe rivalidad en su consumo**, es decir, puede consumirse por un número ilimitado de personas sin que se afecte el acceso.

Los bienes públicos que cumplen con estas tres características son conocidos como **bienes públicos puros**. El mejor ejemplo de este tipo de bienes públicos es la defensa nacional, la cual se conforma por las actividades políticas y militares encaminadas a evitar una invasión o ataques militares de Estados extranjeros.

- Todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional consumen de forma colectiva el servicio de defensa nacional.
- Ninguna persona puede ser excluida de este servicio mientras se encuentre dentro del territorio nacional. De esta forma, la defensa nacional se presta a todas y todos los mexicanos, sean contribuyentes o no, a las personas extranjeras y refugiadas y a toda persona que radica en la República Mexicana.



- No importa el número de personas, el acceso al servicio de defensa nacional es el mismo por lo que no existe rivalidad en su consumo.

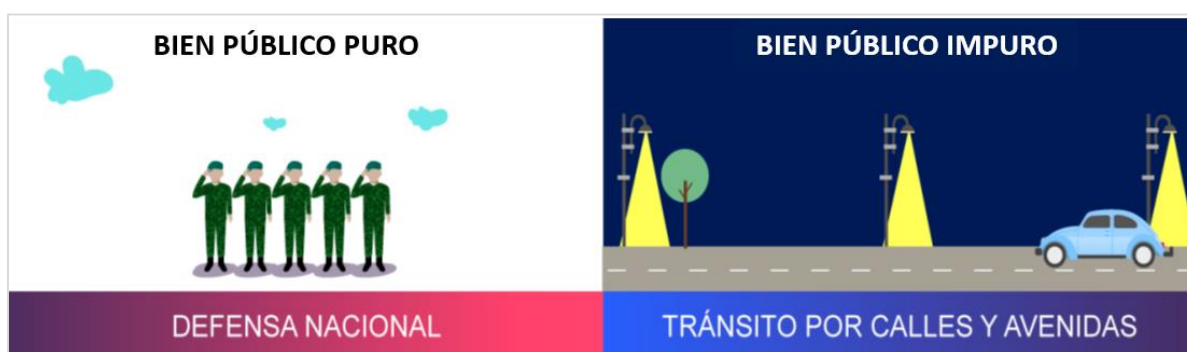
Considerando que se cumplen todas estas características, la defensa nacional es un bien público puro.

Por su parte, los **bienes públicos impuros** cumplen las dos primeras condiciones, pero no la tercera, es decir, existe cierta **rivalidad** ya que el consumo de un nuevo individuo disminuye la disponibilidad para el resto. Un ejemplo de un bien público impuro son las calles y avenidas.

- Las vialidades son consumidas de forma colectiva por las personas que transitan por ellas, por lo que cumple la primera condición.
- No se impide que ninguna persona transite por las vialidades, por lo que cumple con el principio de no exclusión.
- Pero, si muchas personas convergen en el mismo lugar a la misma hora deseando transitar por determinadas calles y avenidas, éstas se podrán saturar, generando así una limitación en el acceso al servicio.

Por esta razón, las calles y avenidas no cumplen con el principio de no rivalidad, constituyendo así un bien público impuro.

Figura 1.8. Bienes públicos puros e impuros



▮ Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Stiglitz (2000).

De acuerdo con Stiglitz (2000: 151), se pueden identificar dos tipos de **fallas** asociadas a los bienes públicos: el **subconsumo** y el **suministro insuficiente**. El primero se refiere a la



ineficiencia económica ocasionada por el cobro de un bien no rival y que no genera aumento considerable de costos al hacerlo llegar a más personas. Ejemplo de ello son las autopistas ya que el hecho de que un individuo la utilice no reduce la posibilidad de que otro también pueda acceder a ella. Por su parte, el suministro insuficiente se origina por la falta de incentivos para que productores o vendedores generen un bien que no es rival, dado que no podrían cobrar por él o si lo hicieran, no sería redituable.

Es importante mencionar que muchos de los bienes y servicios necesarios para que las personas puedan llevar a cabo sus actividades diarias, poseen precisamente características como la no rivalidad y la no exclusión por lo que, en la mayoría de los casos, el mercado carece de interés en producirlos. A esto se suma el llamado problema del *freerider* o polizón, que se origina cuando usuarios potenciales de un bien o servicio esperan a que éstos sean provistos para poder consumirlos sin incurrir en algún tipo de pago (UNIDO, 2008: 7). Por ejemplo, cuando en un edificio los vecinos cooperan para contratar servicios de vigilancia, una o más viviendas pueden no pagar este servicio y aun así gozar de los beneficios de la presencia del personal de seguridad.

Con base en estos elementos, surge la necesidad de la intervención del Estado no sólo a través de la recaudación de impuestos, sino también en la producción y provisión directa de bienes y servicios públicos.

Figura 1.9. Bienes públicos



| Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.



Finalmente, la intervención del Estado también puede obedecer a la intención de corregir la inequidad en la distribución del ingreso que se generaría si la provisión de bienes y servicios se dejara en manos de particulares. Esto dado que la competencia no garantiza que el ingreso generado se distribuya equitativamente, por lo que es importante establecer acciones que contribuyan a aminorar la pobreza o reducir la desigualdad.

Una herramienta fundamental para la provisión de bienes públicos es la **empresa pública**. El fin primordial de la empresa pública es garantizar la oferta de un bien o servicio estratégico, básico o fundamental para el desarrollo y bienestar de la sociedad y no necesariamente para obtener un beneficio económico. En otros casos, el Estado debe invertir en la creación de empresas productoras de bienes básicos para atender a toda la población, sin distinguir por ninguna condición.

Si bien estos bienes también podrían ser producidos por empresas privadas, el precio de dichos bienes los pone fuera del alcance de la población con menores ingresos, haciendo que las brechas de desigualdad se intensifiquen. La atención a la pobreza es una de las prioridades de todo buen gobierno, ya que una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es factor indispensable de cohesión, instauro la ley del más fuerte y acaba en un total envilecimiento.

Así, el bien público se puede ofrecer a la población de escasos recursos con precios subsidiados. En virtud de las limitaciones de recursos del sector público, también se pueden constituir empresas a través de alianzas público-privadas para satisfacer necesidades sociales y demandas de bienes y servicios públicos. Estas alianzas pueden comprender proyectos de producción de bienes o generación de servicios o simplemente para la administración de los mismos.

Otra razón para la creación de empresas públicas, es la producción de bienes y servicios que por su naturaleza se definen como **monopolios naturales**. Un monopolio natural surge cuando “las economías de escala hacen que los productores más grandes tengan costos totales medios inferiores” (Krugman, 2008, p.287), es decir, que a los pequeños productores les sea imposible competir por la misma naturaleza del bien o servicio.



Así pues, la demanda de los bienes públicos tiene su fundamento en los derechos que consagra el marco jurídico (los derechos humanos reconocidos y la igualdad en el acceso a los bienes públicos). **No todos los bienes públicos deben ser gratuitos**, su costo en el mercado depende de decisiones de política, como es el caso de los bienes subsidiados para favorecer a determinados grupos sociales o para proteger la economía de las familias.

Para corregir estas fallas de mercado, el Estado establece los compromisos gubernamentales para atender las necesidades de la población, a través del ejercicio de planeación nacional que se ve reflejado, para el caso de México, en el **Plan Nacional de Desarrollo (PND)**, que define los objetivos prioritarios del gobierno durante cada sexenio.

1.3. Marco constitucional para la actuación del Estado mexicano

La forma como el Estado mexicano interviene en la economía nacional está asentada en la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)** la cual es el instrumento jurídico-normativo de mayor jerarquía en el cual se establecen las reglas de comportamiento y organización de nuestra nación.

Figura 1.10. Formas de intervención que se definen en la CPEUM



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.



Entonces, a partir de la CPEUM deriva el entramado normativo que regula con mayor detalle la planeación nacional y las políticas fiscal y monetaria. Antes de entrar en detalle en estos temas, vale la pena mencionar el tipo de Constitución con el que se identifica nuestra Carta Magna y cuáles son sus principales funciones. La CPEUM es del tipo **rígido**, ya que a diferencia de las Constituciones flexibles que pueden ser modificadas por la vía legislativa ordinaria, la nuestra se elabora y reforma a través de actos normativos especiales señalados en el mismo texto fundamental. Por ende, es más difícil cambiar una Constitución rígida que una flexible.

Figura 1.11. Funciones de la CPEUM



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED (2016).



De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la CPEUM, la estructura del Estado mexicano está caracterizada por su división en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Legislativo Federal se integra por el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en dos Cámaras la de Diputados y la de Senadores. Su función es la iniciativa, modificación o eliminación de las leyes que rigen al país. Por su parte, el Poder Judicial Federal se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito, quienes deben de garantizar y procurar la impartición de justicia y el respeto a las leyes. El Poder Ejecutivo Federal, es representado por el Presidente de México, quien se encuentra a cargo de la Administración Pública Federal (APF).

La APF es un conjunto de dependencias u organismos públicos que se encargan de distribuir los recursos en cada uno de los sectores como salud, bienestar, educación, vivienda o seguridad ya que es importante que se utilicen de manera eficiente para que se puedan cubrir cada una de las necesidades presentes en estos sectores. La APF se organiza conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en 1976, y reformada por última ocasión el 21 de enero de 2021.

Figura 1.12. Integración de la Administración Pública Federal

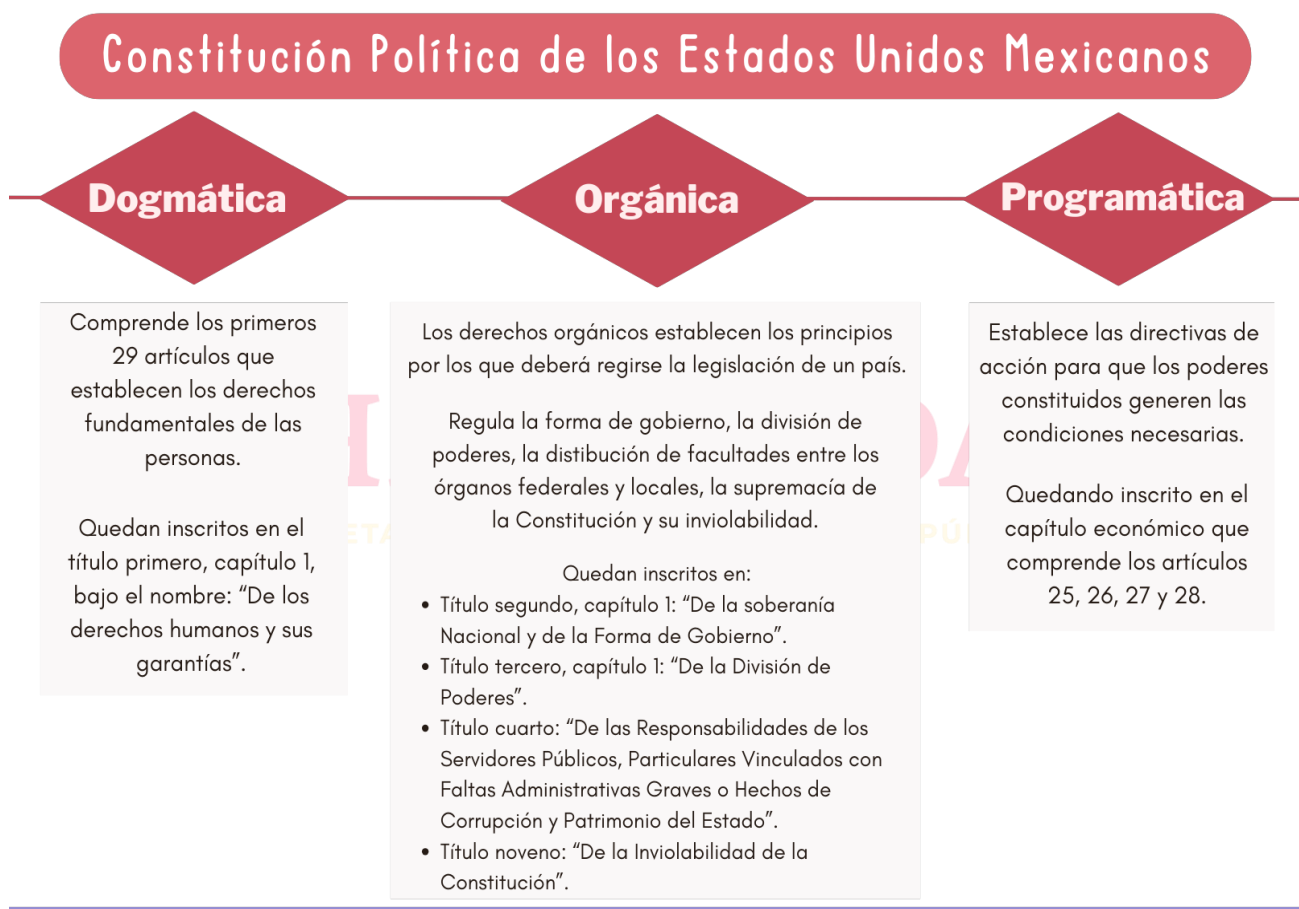


Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



Para tener una mejor idea sobre cómo se distribuyen las obligaciones y responsabilidades del Estado, es útil conocer cómo se divide conceptualmente la Constitución, tal como se muestra a continuación.

Figura 1.13. Partes de la CPEUM



! Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Ríos (2009).

En la parte programática o capítulo económico de la CPEUM, quedan sustentadas las facultades del Estado para **planear el desarrollo y ejercer los recursos públicos**. Los artículos de esta parte programática configuran las relaciones entre el Estado y la sociedad para alcanzar el bienestar y la igualdad que la propia Constitución proclama, concentrando en su contenido los siguientes aspectos prioritarios para el Estado:

- Su responsabilidad en la rectoría del desarrollo nacional.
- Su propiedad original de las tierras y aguas que constituyen el territorio nacional.



- Su reserva respecto al aprovechamiento de ciertas áreas y actividades consideradas como estratégicas o prioritarias para el desarrollo nacional.
- Su responsabilidad en la dirección de la planeación de un desarrollo nacional democrático e integral.

La CPEUM dota al Estado de recursos suficientes para contar con una administración pública eficaz y con las herramientas necesarias para la formulación y administración de las políticas públicas. Las políticas públicas las vemos materializadas a través de la Administración Pública, que finalmente es quien las ejecuta, ayudando, con esto, al desarrollo de una sana convivencia social, política y económica de los individuos que le dan vida al Estado. Su propósito es resolver los problemas más delicados para una sociedad, como pueden ser el hambre, la pobreza, la alimentación, el empleo, la salud, la vivienda digna, entre otros.

Específicamente, el artículo 26, apartado A, de la CPEUM, establece que habrá un **Plan Nacional de Desarrollo** al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la APF, y además faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los Programas derivados del mismo.

Por su parte, en el artículo 134 de la CPEUM se establecen las bases jurídicas para orientar y normar el ejercicio de asignación de recursos presupuestales con el objetivo de promover el desarrollo.

“Contiene las normas para el ejercicio de todos los recursos públicos federales, estatales o municipales, y establece la obligatoriedad de la evaluación de los resultados en su aplicación. Además, requiere que la administración de los recursos públicos se haga con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.



Más adelante regresaremos a este artículo, ya que también norma la evaluación de los resultados del ejercicio de dichos recursos.

En materia **macroeconómica**, corresponde al Ejecutivo en sus funciones de gobierno, la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como la programación y presupuestación del gasto público. Estas funciones tienen su soporte en el marco constitucional, en leyes y normas que regulan la recaudación fiscal y el ejercicio de los recursos públicos, lo cual ha dado lugar a los arreglos institucionales a través de los cuales la APF, así como las administraciones públicas estatales y municipales, deben rendir cuentas a la sociedad.

1.4. Política macroeconómica

La macroeconomía es la rama de la economía que se encarga de estudiar los **sistemas económicos** de una región o un país **como un conjunto**. Se ocupa del estudio del comportamiento de los grandes agregados económicos: la producción, el empleo, el consumo y la inversión.

Además del análisis teórico y empírico del comportamiento y tendencias futuras de las variables mencionadas, la macroeconomía también se encarga del análisis y diseño de medidas de política que buscan influir en las tendencias de los agregados económicos, por ejemplo, la **inflación**. De este modo, se puede hablar de políticas macroeconómicas favorables al crecimiento del ingreso y la generación de empleos, para mantener controlado el nivel de precios, evitar desequilibrio en las finanzas públicas o para orientar las relaciones económicas con el exterior.

Por ello, **la política macroeconómica es la política económica de un país**; sin embargo, no debe ser entendida solamente como un conjunto de propuestas o instrumentos orientados hacia el manejo de las variables económicas. Lo sustantivo de la política económica es el **ejercicio de la política**, que se trata de un conjunto de lineamientos mediante los cuales el Estado se regula y, junto a las instituciones, dan rumbo el proceso económico del país. De ahí la razón de que existan diversos enfoques de política económica.



Tal como se revisó previamente, los instrumentos de política económica relativos al comportamiento global de la economía, se establecen por medio de la **política fiscal** (el manejo de los ingresos y el gasto gubernamental) y la **política monetaria** (la regulación y control del dinero en circulación). Se suma a ellos la **política cambiaria** y, con objetivos más específicos y destinados solo a ciertos sectores, se encuentran la **política industrial**, la **agropecuaria**, entre otras.

Las políticas de impacto global, es decir, que afectan el comportamiento general de las variables macroeconómicas (por ejemplo, la inversión o el consumo) son las que se abordan desde la perspectiva macroeconómica. En esta consideración entran las finanzas públicas pues su manejo, sea por el lado de los ingresos (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) o del gasto (inversión y gasto públicos), afecta el comportamiento de la economía en su conjunto. El sentido de las políticas o el tipo de instrumentos a utilizar depende de la manera como se quieran alcanzar los objetivos macroeconómicos.

Figura 1.14. Sentido de las políticas o de los instrumentos macroeconómicos



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.



Cuando se habla de equilibrio fiscal se hace referencia a la relación entre ingresos y gastos del gobierno. Por su parte, el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos es la relación entre las transacciones de intercambio comercial y financiero con el exterior.

Política fiscal y política monetaria

La **política fiscal o hacendaria** hace referencia al manejo de los ingresos y egresos del Estado. Esta política impacta en los niveles de ingreso de la población, así como en la oferta y demanda agregadas.

A su vez, la **política monetaria** se refiere a las medidas implementadas por el Banco de México que determinan la **cantidad de dinero en circulación**. Dichas medidas, relativas a la magnitud de dinero en circulación, están directamente relacionadas con los

objetivos de control de la inflación o del nivel de la tasa de interés, que le permite cumplir con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda. El Banco de México también puede controlar el circulante monetario imponiendo reglas de reservas a la banca comercial.

Las políticas fiscal y monetaria, interactúan para modificar la tendencia de la economía. A continuación, se explican de una forma sencilla. En una situación de desaceleración, estancamiento o crisis, la combinación de una política fiscal favorable a la expansión del gasto y/o reducción de impuestos combinada con tasas de interés a la baja estimulan la demanda y con ello, la recuperación económica. A este tipo de medidas se les llama **políticas expansionistas**. Las políticas de expansión deben tener en consideración sus efectos en la inflación o en el desequilibrio externo; es decir, evaluar cuando un impulso a la demanda agregada que no es acompañado de un incremento de la oferta interna se traduce en **un incremento de precios o mayores importaciones**, lo cual implica aumentos en el tipo de cambio y un deterioro en el poder adquisitivo de los perceptores de ingresos fijos.

En términos sencillos, la **oferta** es el conjunto de bienes y servicios que los productores ponen a disposición de los compradores en el mercado. La **demanda** es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean comprar en el mercado.

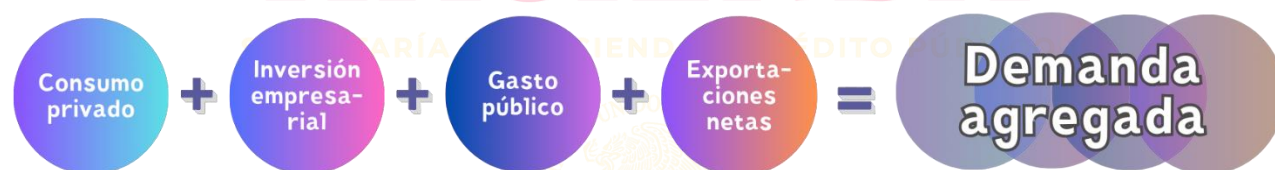


PbR Presupuesto basado en Resultados

El conjunto de la producción nacional interna de bienes y servicios listos para el consumo final es el **Producto Interno Bruto (PIB)**, y si a ello se suma la cantidad de bienes y servicios importados, se obtiene la **oferta agregada**.

Ahora bien, en el proceso de producción de dichos bienes y servicios se pagan sueldos, salarios, intereses, rentas y los beneficios para los dueños del capital, lo que en su conjunto representa el nivel de ingreso de la economía. Este ingreso (descontando los impuestos y agregando el impacto de los subsidios) se destina a la compra de los mismos bienes y servicios que se produjeron, así como de aquellos que se adquieren en el exterior. Si a este consumo de las familias o consumo privado se le suman la inversión empresarial, el gasto público y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones¹, también conocida como exportaciones netas, se obtiene la **demanda agregada**.

Figura 1.15. Demanda agregada



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED, con base en Caballero (2020).

La política fiscal y la monetaria influyen en el nivel de la demanda y de la oferta; ambas pueden estimular o desincentivar la economía ampliando o contrayendo la capacidad de gasto de la economía y su capacidad productiva. Por ejemplo, en una fase **recesiva** de la economía, el gobierno puede aumentar el gasto, reducir los impuestos o ampliar la disponibilidad de dinero en la economía para aumentar la demanda agregada, hacer más atractiva la inversión y estimular la recuperación económica. Por el contrario, cuando la economía crece aceleradamente, más allá de su capacidad real, y genera presiones y desequilibrios en algunos sectores o bien una **inflación acelerada**, el gobierno puede

¹ Exportaciones menos importaciones.



optar por contener el gasto público, reducir su inversión, elevar impuestos o incrementar las tasas de interés para frenar la expansión de la demanda y de la economía.

En este contexto, en términos de los ingresos y gastos gubernamentales, un aspecto que vigila el gobierno es la relación entre sus ingresos y gastos, dado que uno de los objetivos centrales de la política económica, es mantener esta relación en **equilibrio**; es decir, que **no haya déficit público**. En otras palabras, el déficit público se da cuando son mayores los gastos del gobierno de lo que recibe por concepto de impuestos (Astudillo, 2012:14). Con respecto a los gastos gubernamentales, el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), señala en su tercer párrafo que:

“... el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir al equilibrio presupuestario. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto contribuye a dicho equilibrio durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos”.

Por su parte, la política monetaria tiene como objetivo controlar la inflación. A partir de esta premisa, la política monetaria puede orientarse a estimular la economía si se aumenta la cantidad de dinero en circulación, por ejemplo, con una reducción de las tasas de interés, o bien a contener una expansión económica acelerada restringiendo el dinero en circulación, por ejemplo, encareciendo el dinero al aumentar la tasa de interés.

El reto para las autoridades es **combinar y hacer congruentes la política fiscal y monetaria** para estimular el crecimiento de la economía en etapas recesivas, o bien para contener un excesivo crecimiento de la demanda que derive en problemas de inflación en las fases de crecimiento acelerado del empleo y con una producción por arriba de la capacidad real de la base económica productiva.

Así, es posible que un crecimiento de la producción pueda ir acompañado de un incremento en los precios. Si este último es inferior al ritmo de crecimiento de la economía, no se convertiría en un problema grave. No obstante, si la demanda crece y la



oferta no responde, entonces se generará un problema de inflación y de desequilibrio externo, lo cual implica un aumento generalizado de precios. En un marco de crecimiento generalizado de precios, uno de los efectos más negativos de la inflación es que no todos los precios se incrementan en la misma proporción, es decir, unos crecen más que otros y, en particular, es común que los incrementos de los salarios monetarios sean inferiores al crecimiento promedio de los precios, originando una redistribución regresiva del ingreso. El **ejemplo** más claro del impacto negativo de la **inflación** es cuando el aumento de precios de artículos de la canasta básica de consumo es mayor al incremento del salario. La política económica es un reflejo de la política gubernamental, y no existe una visión única o universalmente aceptada de qué instrumentos aplicar en las diferentes fases del ciclo económico.

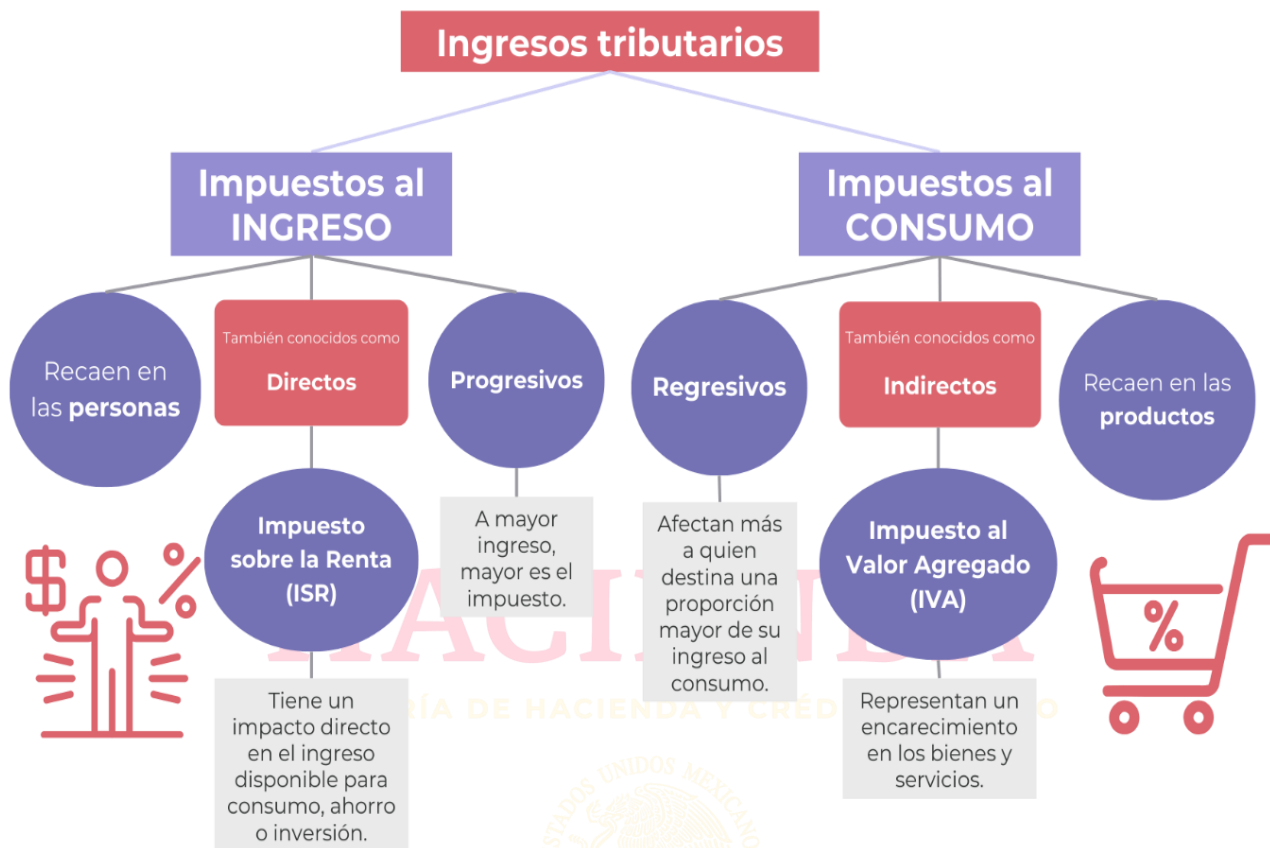
Tributación y demanda agregada

El efecto de los **impuestos** sobre la economía se puede revisar a la luz de sus efectos sobre tres variables interrelacionadas: producto, ingreso y gasto. En términos generales, se cuenta con dos tipos de impuestos: los que **gravan el ingreso** (directos) y los que **gravan el consumo** (indirectos) los cuales pueden ser progresivos o regresivos.

Los impuestos progresivos se consideran convenientes en términos de equidad ya que le cobran más impuestos a quienes más tienen. Por ejemplo, un impuesto progresivo es el que se les aplica a los vehículos automotores ya que son adquiridos por los sectores con mayor poder adquisitivo y, por tanto, la afectación económica de los contribuyentes en proporción a su ingreso es baja. Por su parte, los impuestos regresivos son aquellos que se aplican de forma “pareja” a todos los contribuyentes sin importar su nivel de ingresos. En términos de equidad, este tipo de impuestos afectan mucho más a los sectores con menor nivel de ingresos, a consecuencia de que el pago del impuesto representa una mayor proporción de su ingreso. Un ejemplo de impuesto regresivo es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).



Figura 1.16. Impuestos al ingreso y al consumo



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.

Entonces, los impuestos al ingreso pueden tener un manejo progresivo, es decir, a mayor ingreso mayor impuesto. Así, un Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado al ingreso de las empresas impacta en sus decisiones de inversión. Si se considera elevado el impuesto dejarán de invertir, si es bajo pueden elevar su producción, su gasto de inversión y con ello favorecer el empleo. Lo mismo sucede con las familias, si el impuesto sobre su ingreso es menor, les quedará un mayor ingreso para gastar y consumir, o bien, para ahorrar.



Figura 1.17. Impuestos progresivos y regresivos



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.

Los impuestos a los ingresos de las personas físicas o morales tienen un impacto directo en el ingreso disponible para consumo, para ahorro o para inversión, por ello, su manejo debe realizarse considerando su impacto en la demanda agregada y en la oferta de recursos para la inversión. El Estado puede tener una mayor capacidad de gasto como consecuencia de un incremento en el impuesto a la renta, pero al mismo tiempo, ello puede frenar las actividades económicas al reducir la capacidad de gasto de consumidores y empresas.

El efecto real de la tributación es su impacto sobre el ingreso disponible de las empresas y las familias, quienes en función de ello toman decisiones de mayor o menor inversión o consumo. Este es un mecanismo para estimular o contraer la demanda y con ello incidir en el nivel de empleo, pero también tiene efectos en la distribución de ingreso.



Gasto público y demanda agregada

Para que el Estado pueda proveer bienes y servicios, llevar a cabo acciones de política pública y disminuir los efectos de las fallas del mercado, es evidente que necesita recursos. Al valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo se le conoce como **gasto público** (Ayala, 1992: 141). Es parte de la demanda agregada y comprende todas las erogaciones que realizan los Poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Igualmente, incluye las erogaciones del sector paraestatal como los organismos descentralizados y las empresas productivas del Estado.

De acuerdo con Ayala (1992: 141), el gasto público es el instrumento más poderoso a disposición del Estado para influir en la asignación y distribución de los ingresos, y en la estabilización o desestabilización de la economía. Agrupa al consumo de bienes y servicios y a la inversión gubernamental. La parte del gasto en bienes y servicios para la realización de actividades cotidianas gubernamentales se clasifica como **Gasto Corriente** y tiene un efecto en la demanda de la economía. Comprende rubros como los sueldos, salarios, prestaciones, viáticos y gastos de operación. De esta manera, incluye los sueldos de maestros, médicos y enfermeras, empleados de los tribunales, bomberos, policías, pensiones, subsidios, etcétera, así como todas las compras de bienes y servicios necesarios para la realización de sus funciones.

Por otra parte, el **Gasto de Capital**, además de contribuir al desarrollo de la infraestructura y al incremento en la producción de bienes y servicios públicos, estimula la demanda, con lo que se contribuye al incremento del ingreso y la generación de empleos.



Figura 1.18. Gasto corriente y gasto de capital



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED.

En tanto que el gasto público considera la utilización de recursos que permiten el funcionamiento del gobierno, además de la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, éste se consolida como un instrumento esencial generador de cambios estructurales. Por tal motivo, es muy importante que la sociedad lo conozca, se involucre, dé seguimiento y evalúe el desempeño de sus gobiernos con la finalidad de fomentar una utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Considerando la relevancia del gasto público, es indispensable que su erogación se haga bajo el más estricto sentido de la austeridad y evitando a toda costa los actos de corrupción ya que este fenómeno ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico.



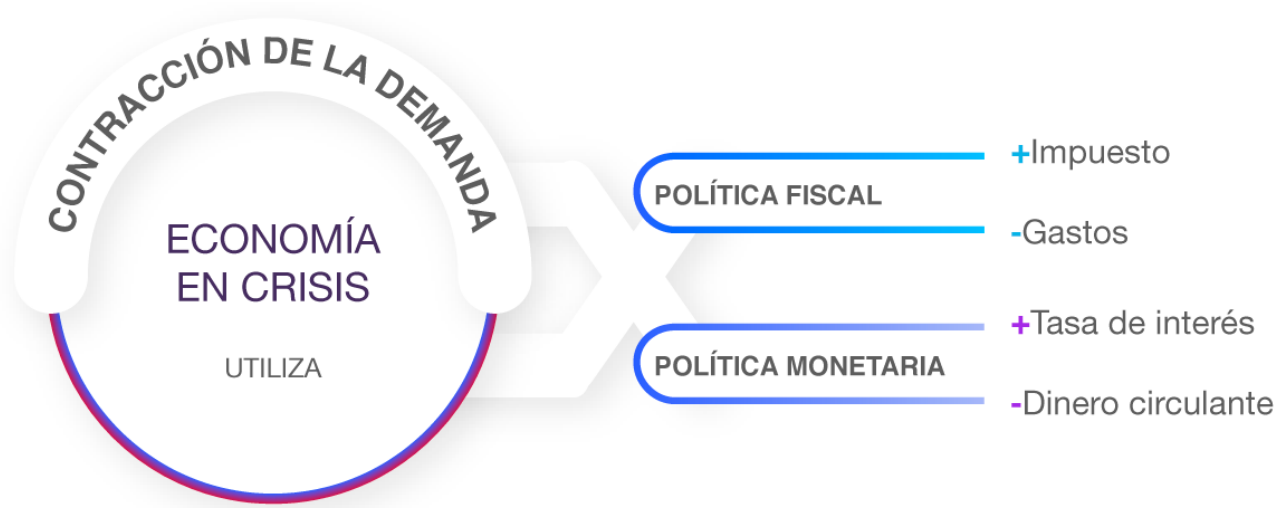
1.5. Políticas pro-cíclicas y anti-cíclicas

Con los instrumentos gubernamentales de la política fiscal y de la política monetaria se pueden tomar decisiones para estimular o contraer la economía. Dependiendo del enfoque que siga cada gobierno, la intervención puede darse siguiendo la tendencia del ciclo económico, o bien, en sentido contrario a ella. Si se adoptan medidas que acentúen la tendencia observada se estará adoptando una política **pro-cíclica**. Si se toman decisiones que van contra la tendencia mostrada, se estará en presencia de una política **anti-cíclica**. De este modo, los gobiernos pueden incidir en el ciclo económico conteniendo, moderando o impulsando su tendencia. A continuación, se explican las características, ventajas y desventajas de cada una de estas políticas.

Política pro-cíclica

Por ejemplo, si una economía pierde dinamismo e inicia una fase de desaceleración, o ya está en crisis, una política pro-cíclica sería aquella que usa la política fiscal elevando impuestos y reduciendo el gasto, a la vez que la política monetaria eleva las tasas de interés y reduce la cantidad de dinero en circulación. Esto es, toma medidas que contraen aún más la demanda.

Figura 1.19. Política pro-cíclica



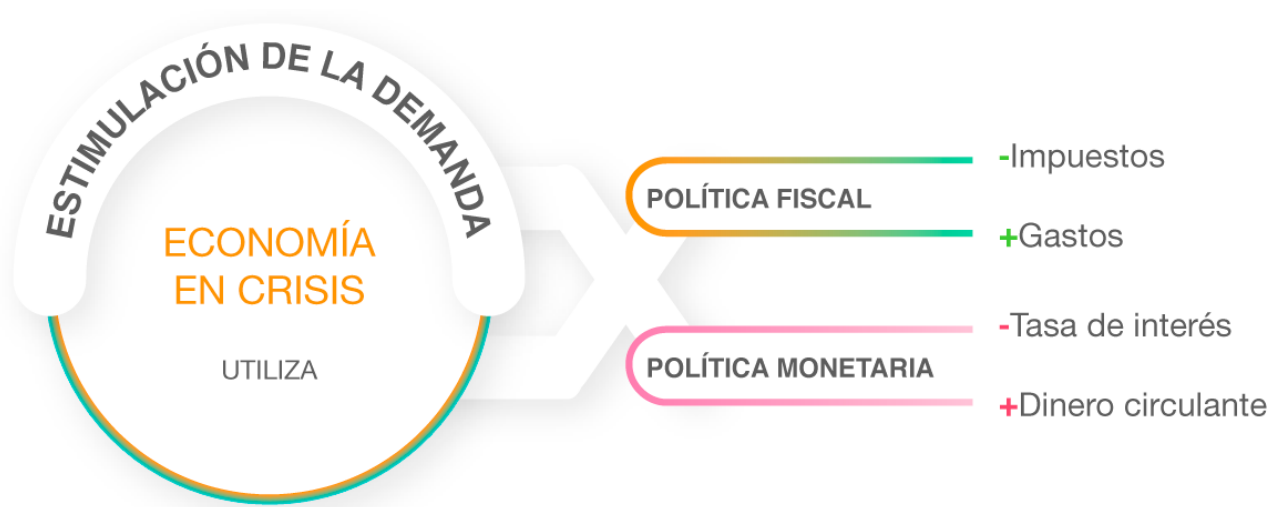
Fuente: Elaboración propia SHCP-UED (2016).



Política anti-cíclica

En sentido contrario, si una economía pierde dinamismo, inicia una fase de desaceleración o ya está en crisis, una política anti-cíclica sería aquella que utiliza la política fiscal reduciendo impuestos y elevando el gasto, a la vez que la política monetaria reduce las tasas de interés y amplía la oferta de dinero. Esto es, toma medidas que estimulan la demanda y con ello crea condiciones favorables para elevar el consumo y la inversión.

Figura 1.20. Política anti-cíclica



Fuente: Elaboración propia SHCP-UED (2016).

¿Cuándo y qué tipo de decisión tomar?

No existe una respuesta única, la determinación de la política fiscal y monetaria de un gobierno dependerá de diversos factores, entre los que destaca el enfoque de política económica asumido por el gobierno y el contexto macroeconómico nacional e internacional.

En algunos casos, en momentos de recesión y crisis, se ha optado por seguir el ciclo económico con el fin de reducir, vía políticas fiscales y monetarias restrictivas, desequilibrios financieros aún a costa del impacto en la producción, el empleo y el nivel de ingreso. Esta opción asume que una vez corregidos determinados desequilibrios



económicos, dará inicio una etapa de crecimiento que llevará a la recuperación del nivel de empleo.

Otras experiencias han tratado de contener la fase recesiva adoptando políticas expansionistas que estimulen la inversión y la demanda vía el aumento del gasto público, especialmente en inversión, así como tratando de reducir la tasa de interés, a fin de estimular el consumo y la inversión y revertir la tendencia del ciclo recesivo. Un ejemplo de este último caso lo da la experiencia estadounidense, cuando a partir de la crisis de 2008, el gobierno intervino “rescatando” bancos y algunas industrias, así como realizando transferencias monetarias a las familias y llevando a la baja la tasa de interés. En 2015, los países de la eurozona adoptaron una política similar. Asimismo, conforme datos del Banco Mundial (2017), el 42% de los países de América Latina aplicaron políticas Pro-cíclicas.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Referencias

- Aguilar, Luis.** (2006). Gobernanza y gestión pública. FCE. Recuperado de: <https://marcelagonzalezduarte.files.wordpress.com/2018/01/aguiar-villanueva-gobernanza-y-gestion-publica.pdf>
- Astudillo, M.** (2012). Fundamentos de Economía. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ayala, J.** (1992). Economía del Sector Público Mexicano, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Caballero, J. L.** (2020). Oferta y demanda agregada en México. El Economista. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/economia/oferta-y-demanda-agregada-en-Mexico-20200222-0007.html>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** (2024). Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Jeannot, F.** (2000). De las fallas de mercado a las fallas de las organizaciones. Análisis Económico.
- Krugman, P., Wells R. y Olney M. L.** (2007). Fundamentos de Economía. Barcelona, España: Editorial Reverté.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.** Última reforma: 11 de enero de 2021. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf
- Prats, J.** (2007). Revisión Crítica de los aportes del Institucionalismo a la Teoría y la Práctica del Desarrollo. Revista de Economía Institucional.
- Ríos, J. L.** (2009). Marco constitucional de la rectoría económica del Estado mexicano. En Observatorio de la Economía Latinoamericana.
- Samuelson, P. y Nordhaus, W.** (2005). Economía. Decimoctava edición. España: McGraw-Hill.



Stiglitz, J. (2000). La economía del sector público. España: Antoni Bosch editor.
Recuperado de:

<https://maestriaunam.diputados.gob.mx/documentos/mat6consultaG1/material%20profesor/Stiglitz%20-%20La%20econom%C3%ADa%20del%20sector%20p%C3%BAblico.pdf>

UNIDO. (2008). Public goods for economic development. Viena: United Nations Industrial Development Organization.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



PbR

Presupuesto basado
en Resultados